



REVISTA
**ESTUDIOS SOCIALES
CONTEMPORÁNEOS**

ISSN 2451-5965



La convergencia asistencia/seguridad. Trama de regulación de la pobreza

**The convergence of assistance/security.
Framework for the regulation of poverty**

Emilio Seveso

Universidad Nacional de San Luis
ejseveso@unsl.edu.ar

Alejandra Peano

Universidad Nacional de Villa María
alepe6@hotmail.com

Ayelén Sanchez

Universidad Nacional de Córdoba
latorredecubos@gmail.com

Milva Valor

Universidad Nacional de Córdoba
milva.valor@gmail.com

Enviado: 5/2/2018 - Aceptado: 8/5/2018

“Emilio Seveso, Alejandra Peano, Ayelén Sanchez y Milva Valor (diciembre 2018) “La convergencia asistencia/seguridad. Trama de regulación de la pobreza” en Revista de Estudios Sociales Contemporáneos N° 19, IMESC-IDEHESI/CONICET, Universidad Nacional de Cuyo, pp. 74-98”



Resumen

El presente trabajo caracteriza la convergencia entre políticas asistenciales y de seguridad en tanto trama estratégica orientada a intervenir activamente los escenarios de pobreza. Reconoce, por este camino, la relevancia de las transformaciones tanto técnicas como políticas de las tecnologías sociales, a partir de las cuales son reguladas las relaciones y los conflictos entre-clases. La exposición está organizada en tres apartados. El primero corresponde al nivel analítico, en el que la dinámica de acumulación/reproducción capitalista y la tendencia de ocupación/desposesión territorial a ella asociada son puestas en relación con la trama estratégica referida. El segundo apartado remite por su parte a los casos de análisis, a partir de los cuales se evidencia la relevancia de las políticas asistenciales/de seguridad como trama de regulación y control clasista. Aquí los materiales de base conjugan el análisis documental con datos secundarios y entrevistas a los actores, integrados de manera variable a partir de la descripción de escenas de conflicto. La última sección, finalmente, desarrolla las principales conclusiones del trabajo, en las que se destacan una serie de puntos resultantes de las indagaciones precedentes.

Palabras claves: políticas sociales, seguridad, territorio, pobreza

Abstract

The present work characterizes the convergence between welfare and security policies as a strategic plot oriented to intervene poverty. It recognizes in this way the relevance of both technical and political transformations of social technologies, from which are regulated the relationships and conflicts between classes. The exhibition is organized in two sections. The first corresponds to the analytical level, in which the referred plot is understood in relation to the dynamics of capitalist accumulation / reproduction and to the occupation / territorial dispossession tendency associated with it. The second section refers to the cases of analysis, from which the relevance of welfare / security policies as a regulatory and control framework is evidenced. Here the basic materials combine the documentary analysis with secondary data and interviews with the actors, integrated in a variable way from the description of conflict scenes. The last section refers, finally, to the main conclusions of the work, which highlights a number of relevant points that result from previous inquiries.

Keywords: social and security policies, territory, poverty

1. Introducción

El presente trabajo propone contribuir a la comprensión de las modalidades de regulación de la pobreza en escenarios del Sur Global, caracterizando las articulaciones estratégicas, convergentes y vectorizadas, entre políticas asistenciales y de seguridad. A fin de anclar la discusión recuperamos dos experiencias en las que el Estado constituye un agente preponderante en las relaciones entre el mercado y la sociedad civil, vertebrando programas específicos tendientes a la regulación de conflictos.

Los casos indagados remiten, en principio, a un tiempo/espacio particular como supone la provincia de Córdoba durante el año 2013. El primero de ellos está enmarcado en los saqueos a comercios producidos durante el mes de diciembre en la capital, en el contexto de medidas de paro y reclamo salarial de las fuerzas de seguridad que permiten puntualizar en las respuestas “sociales” asumidas frente al conflicto. El segundo caso refiere al proyecto de la multinacional Monsanto en la localidad de Malvinas Argentina, relativo al tratamiento de semillas transgénicas y tecnologías de siembra, que encontró una fuerte oposición entre los pobladores y diversas organizaciones de la sociedad civil que resistieron hasta el desanclaje de la empresa en el año 2016.

Pese a sus diferencias, la emergencia de estos conflictos es comprendida aquí como expresión singular de una compleja dinámica que, primeramente, visibiliza la mecánica de expulsión y desposesión generada por el sistema de producción capitalista hoy; en segundo lugar, refiere a la prevalencia de acciones insumisas y rebeldes en los sectores afectados, en tanto marca de resistencia que emerge en las urbes contemporáneas; y, finalmente, destaca un “set” estratégico de medidas orientado a desarticular y/o contrarrestar los escenarios tensivos asociados a estos procesos. En este último sentido, e independientemente de los discursos “humanitarios” que pretendan justificar su instrumentación, las políticas sociales y de seguridad adquieren particular relevancia en tanto trama de regulación y control activo sobre poblaciones y territorios que se encuentran marcados por su perfil de clase.

Para el abordaje de la temática proponemos organizar el trabajo en tres apartados. El primero atraviesa el nivel propiamente analítico, conceptuando la dinámica de acumulación desde los procesos de producción de plusvalía económica y ecológica, las tendencias de ocupación y desposesión territorial a ellos asociados, así como las modalidades estratégicas de gestión intervinientes. El segundo trabaja los casos de análisis, contextualizados a partir de sus raíces conflictuales, los principales actores en tensión y las políticas encarnadas en sistemas institucionales específicos. El apartado de cierre, finalmente, recupera de manera sucinta las relaciones entre los elementos esbozados, a la vez que destaca las principales conclusiones del artículo.

2. Dinámica de acumulación, procesos de desposesión y políticas de intervención en la ciudad

Para comenzar, consideramos relevante partir de un esquema que demarque la estrecha relación estructurante entre la dinámica de reproducción sistémica, las condiciones de conflicto asociadas a la pobreza y la institucionalización de políticas orientadas a su regulación. En este marco es importante considerar la inserción específica de las sociedades latinoamericanas por su condición dependiente, periférica y neocolonial en los escenarios del Sur Global (Scribano, 2012), como también el impacto que estas relaciones suponen para numerosas poblaciones urbanas en términos de procesos de expropiación/desposesión. Es en concurrencia y en tanto doblez de los procesos de generación de valor y a la expansión productiva que entendemos la instrumentación de políticas sociales específicas, concretadas por instituciones y agentes sociales variables, de las cuales nos interesa indagar puntualmente en aquellas de naturaleza asistencial y securitaria.

Sobre esto, cabe realizar una primera precisión. Cuando pensamos en políticas asumimos una perspectiva amplia que se desplaza de la referencia restrictiva al Estado. Lo que de alguna manera revelan las materializaciones vigentes (en programas educativos, planes alimentarios, iniciativas de salud y vivienda, seguridad y formación laboral, entre otras) es una conjunción entre lo que constituyen intervenciones estrictamente estatales, acciones de actores privados y prácticas de agentes de la sociedad civil, que en el marco de complejos procesos de negociación conflictual impulsan, confrontan o apoyan medidas concretas. Por esta razón, no restringimos la capacidad de acción de las políticas. Referimos a medidas que, pudiendo integrar la aludida complejidad de procesos y actores, afectan en general las condiciones de vida de las poblaciones y los territorios en los que habitan (Foucault, 2000), interviniendo activamente el par cuerpo/clase, sus condiciones de movilidad, desplazamiento y reproducción en tanto política de los cuerpos (Scribano, 2007).

2.1 Acumulación capitalista e intervención estatal

En un libro tan clásico, pero a la vez tan relevante como “El Capital”, Karl Marx puntualiza que la base de reproducción del capitalismo es la generación de plusvalía orientada a la acumulación. Esta mecánica, al menos en términos del presente trabajo, necesita ser comprendida desde dos procesos específicos: la producción de plusvalía material y la generación de plusvalía ecológica. En esta lectura nos desplazamos de la mirada ortodoxa hacia una serie de aportes contemporáneos que proveen una actualización de la propuesta interpretativa.

La primera de estas dimensiones (la plusvalía material) precisa ser relacionada con la explotación de la fuerza de trabajo, pero no sólo en un sentido fisiológico (en términos de fuerza brazo/músculo) sino por referencia a las energías sociales disponibles que incluyen también a aquellas de orden psíquico. Desde una concepción ortodoxa el ámbito de extracción de plusvalía por antonomasia es el trabajo, concretamente referido a la esfera industrial. Sin embargo, al plantear la pregunta por esta dimensión en condiciones que implican un despliegue pasmoso

de la mecanización y la consecuente expulsión masiva de la fuerza de trabajo, el proceso de reproducción sistémica evidencia un claro corrimiento. Lo que queremos remarcar al respecto es que la generación de valor ha variado en sus formas, ganando lugar hoy más allá de los ámbitos formalizados clásicos, en cadenas productivas que desbordan la lógica anclada a la modulación y el ritmo de la sociedad industrial (Quattrini y Seveso, 2016; Vergara y Seveso, 2013).

La segunda dimensión a la que referíamos es la plusvalía ecológica. En términos globales, la concreción del proceso productivo supone la materialización de objetos con base en la disponibilidad de insumos y capitales, cuya vía regular de materialización son los recursos naturales disponibles. Pero puntualizar en esta noción implica algo más que reconocer la importancia de esos medios: supone señalar el sobreuso destructivo que en tanto depredación pone en riesgo la capacidad reconstitutiva del sistema a largo plazo. Cuando existe un “plus de uso” de los medios naturales y sociales se plantea la posibilidad de un límite que reenvía a la pregunta por las condiciones de progreso y emancipación posible dentro del actual sistema civilizatorio. Hablamos de una dinámica que corre su frontera continuamente a través del uso de la técnica, expandiendo sus territorios de ocupación sobre la vida humana y la naturaleza (Bensaïd, 2011; Bartra, 2008).

La aplicación de los sistemas de organización industrial al campo, las tendencias de reorganización de la urbe en torno a la disputa por el suelo, sus formas de ocupación y las dinámicas de desplazamiento, así como la producción de sentido desde los medios de comunicación de masas; todos estos procesos, presentes en los casos estudiados, constituyen ámbitos de generación de valor. La plusvalía material, que implica la destrucción del cuerpo vía extracción de energías vitales, y la plusvalía ecológica, ligada a la destrucción de la naturaleza, están integradas a estos procesos tanto como a la reproducción del sistema. Es por esta razón que las condiciones de conflicto acompañan a su procesualidad, resultando a la vez infranqueables e irresolubles.

La noción clásica del término “pobreza” revela, desde este lugar, cierta naturaleza eufemística, en tanto nombra las consecuencias desestructurantes del modelo de acumulación invisibilizando su proceso de producción. En otras palabras, identifica en forma mediada el trabajo de expropiación ejercido sobre poblaciones y sujetos, estimando niveles calóricos y nutricionales “no alcanzados”, estados de precariedad habitacional “estructurales” y rasgos culturales típicos de la vida “en los márgenes”.¹ Es por eso que, dentro de la perspectiva asumida aquí, la noción de pobreza es reinterpretada como expresión y saldo de las prácticas de explotación, depredación y desposesión que el sistema capitalista ejerce, tanto a escala global como local, bajo sus diversas manifestaciones históricas posibles (Seveso, 2014, 2015). Referir por su parte a una noción “clásica” de pobreza redundaría en las deficiencias de una perspectiva atomista y a-histórica, a la vez economicista y

¹ Ciertamente, el uso del término “pobreza” es polisémico. Else Øyen destaca su sistematización en más de doscientas definiciones expertas, aplicadas en variedad de disciplinas y paradigmas (Øyen, 2005: 6, 2003: 31). Por su parte, Paul Spicker (2009) identifica doce posibles formas de interpretación en las ciencias sociales, evidenciando no sólo la naturaleza plástica de su conceptualización, sino también las disecciones y recortes posibles que supone sobre el objeto de estudio.

tecnicista (Boltvinik, 2007), que ocluye el carácter histórico, relacional y conflictivo correspondientes a una perspectiva holística (Seveso, 2014). No por casualidad, encontramos en la región Latinoamérica un enlace incuestionable entre los puntos de vista dominantes en las ciencias sociales, el sello impuesto por los paradigmas hegemónicos y los lineamientos estratégicos diseñados por los principales agentes políticos, tanto nacionales como internacionales, que remiten a una noción “dulcificada” de la pobreza. De allí, pues, que en función de la perspectiva asumida y el problema de estudio optemos por resignificar radicalmente el sentido del término.

2.2 Trama estratégica y matriz de violencia

Teniendo en cuenta esta lectura inicial, entendemos que las ciudades constituyen territorios centrales para la realización de plusvalía, encontrándose sometidas a una doble mecánica de ocupación y desposesión sistémica que reproduce las condiciones de pobreza. Por un lado, la integridad del proceso productivo está directamente ligado en su realización a los modos de organización de la ciudad y a su vínculo intrínseco (e inseparable) con el campo. A su vez, la lógica de acumulación está anclada a la subordinación perpetrada sobre los sectores subalternos, en el contexto de escenarios asimétricamente estructurados política, económica y socialmente, manifestando dependencia frente a los intereses de los capitales internacionales y los sectores de poder. En los escenarios del Sur “estallan los conflictos”, expresando formas diferenciales de existencia vital según clases, visibles en la exposición disímil ante los riegos, en relaciones contrapuestas con las instituciones del Estado, en modalidades de acceso desigual al bienestar, en capacidades expresivas y posibilidades diferentes de canalizar demandas.

Precisamente por ello, dentro de estos escenarios, las políticas de seguridad y las políticas de asistencia pueden ser interpretadas como tecnologías específicas de intervención poblacional, especialmente orientadas a regular/controlar a actores en conflicto que disputan o limitan las condiciones de reproducción sistémica (Seveso, 2015; Cfr. Verdú, 2009; Cfr. Wacquant, 2010; Cfr. Garland, 2005). Sus efectos políticos deben ser comprendidos desde la múltiple dimensionalidad en la que operan, como parte de la columna vertebral de los organismos globales de intervención territorial y de sus recetas de gestión ideológica, política y económica en escenarios locales. Por ello, no es casual que el proceso de consolidación del neoliberalismo en América Latina haya implicado transformaciones profundas en la estructura del Estado (Svampa, 2005), con sendos ajustes en las políticas tanto asistenciales como de seguridad, “atadas” a las recomendaciones de los organismos internacionales.

En este sentido, postulamos un lazo solidario entre la actual geopolítica de ocupación/desposesión territorial y las tecnologías de regulación/control social aplicadas en sociedades del Sur. Colonizar es expropiar; es ocupar; supone habitar el tiempo/espacio del otro; significa contar con el poder para decidir sobre la vida de los otros (Scribano y Boito, 2010). Hoy más que nunca, asistencia y seguridad se revelan como mecanismos de orden y reproducción, asentados en prácticas que profundizan las competencias de gestión, regulación y control. De hecho, en

términos estratégicos, entendemos que su objetivo es atacar las manifestaciones conflictuales asociadas a la pobreza antes que resolver sus causas; asegurar la integridad sistémica antes que la integración social; promover el fortalecimiento eficiente del control en lugar de promover el bienestar social general (Seveso, 2015). No es entonces casual que una de las principales analogías de las políticas estatales indagadas provenga del arquetipo bélico, materializado en términos como los de “combate”, “lucha”, “abatimiento” y “eliminación”.²

Al respecto, es pertinente realizar dos precisiones sobre la relación entre las políticas sociales (asistenciales y de seguridad, según nos interesa) y la forma que adquieren como modalidad de regulación territorial/poblacional. En primer lugar, en orden a constituir una respuesta estratégica socialmente elaborada que permita gestionar los conflictos, las políticas pueden estar vectorizadas desde el punto de vista de sus ámbitos de ejercicio, a la vez que pueden converger en función de sus objetivos. Desde este punto de vista, entonces, actúan en tanto trama. En las políticas estatales esto señala el componente de una argucia social que procura moldear las formas de estar y de hacer de los sujetos en el territorio, tanto como el dónde, el cómo y el entre quiénes en tanto potenciales antagonistas.

Como continuidad a esta lógica, y en segundo lugar, es posible aseverar que existe una matriz de violencia inserta en el uso estratégico de esta trama. La singularidad del planteo resulta relevante en los siguientes términos. La violencia se haya inscrita en la fisonomía del capitalismo desde sus orígenes, arraigada en sus mecanismos de estructuración, caracterizando a sus relaciones en tanto marca y actualizándose por diferentes vías en los estados provisorios de su orden y reproducción. Así, hablamos de la expresión compulsiva de la violencia en el capitalismo según “formas específicas y particularizadas de la crueldad socio/históricamente cambiantes” (Boito, 2014: 21). El Estado y el mercado son propiamente artífices de violencias de clase. En el despliegue de sus políticas es posible hallar la inscripción de dicha violencia como dobles, en tanto pliegue constitutivo, cuyo carácter oculto de producción sólo se revela en un nivel puramente práctico. Partiendo de la alegoría de Wacquant (2010) sobre el “rostro de Jano” del Estado, existe una doble dimensionalidad en las estrategias de regulación: una cara que mira hacia dos lados, imposible de eludir. La existencia de este rostro evidencia el carácter clasista de las intervenciones perpetradas, así como la incidencia de una trama humanitaria/represiva que en su lógica de actuación suele escapar a la percepción debido al marco ideológico que la envuelve (y que, por esta razón, llega a ser captada principalmente por quienes sufren sus consecuencias).³

² En este punto debemos recordar, al menos al pasar, el sentido específico que reviste la noción de estrategia en tanto “ardid de guerra” que cimienta la maniobra de un General para la conducción de su ejército (Corominas, 1994: 258); noción que, desde el uso concretado por los ideólogos y asesores del stratego moderno, nos remite a la lógica de la ocupación neocolonial, en tanto “conjunto de las disposiciones o de los preparativos para la batalla; o el conjunto de las condiciones impuestas al oponente, como tiempos y lugares de acción” (Vázquez-Presedo, 1992: 6).

³ Nótese que en la afirmación anterior decimos humanitaria, más no humanista, ya que – como recuerda S. Valencia – en territorios descontextualizados de la lógica etnocéntrica de la eticidad capitalista existe un desarrollo dispar en la pertinencia y aplicabilidad de eso

2.3 Sensibilidad y violencia clasista

Anticipamos que las políticas indagadas están fuertemente atravesadas por la estructura del sentir que rige a nuestras sociedades. Las modalidades de regulación y control de la pobreza, y particularmente su legitimidad, están directamente vinculadas a esta dimensión. Veamos esta idea con mayor precisión.

Visto en perspectiva analítica, la dinámica del capitalismo en general no puede ser entendida sin captar la configuración activa de la sensibilidad que acompaña a los procesos de orden y conflicto. Nuestras maneras de apreciarnos y apreciar el mundo están moduladas por la estructura de expectativas y deseos que organiza nuestras percepciones y emociones. La forma de esa estructura nos interpela de manera transclasista, más allá de que en la vectorización de las dimensiones de clase, género, edad, etcétera, se concrete en contenidos específicos. A su vez, en clave hegemónica, es importante tener en cuenta que la lógica sistémica está inscripta en la constitución de esa estructura.

De este modo, cabe preguntar ¿Qué tipo de ciudad deseamos?, ¿Qué relaciones la constituyen?, ¿Cómo se configura en ella el otros/nosotros de clase? Por lo general nuestra sensibilidad prescribe relaciones que al menos estén atravesadas por las claves del orden, la productividad, la pulcritud y la seguridad en ámbitos urbanos, aunque ciertamente la dimensión “natural” constituye otro aspecto central de la imagen ideal/deseada del entorno (Boito y Seveso, 2016). Desde distintos frentes estructurantes, estos aspectos constituyen demandas de la ciudadanía y líneas de acción constantes en la política pública. Pero la posibilidad de esta materialización refiere a un doblez asociado a procesos de ocupación y desposesión co-sustanciales. Así, más allá de las claves “burguesas” que estructuran a la ciudad, existen pliegues generativos que refieren a la posibilidad de su producción: inseguridad y desorden, segregación e improductividad, marginalidad y contaminación, son contrararas complementarias y constitutivas del ensueño urbano; así como lo es la pobreza en tanto “síntesis” de sus expresiones.

Como pieza clave de una vida que va siendo constituida en clave hegemónica, el otro de clase -que en ocasiones demanda y disputa los códigos de la sociedad burguesa desde numerosas expresiones conflictivas- tiende a ser expuesto dentro de esta estructura de sensibilidad nada menos que como un fantasma⁴; esto es:

que suele nombrarse por “humanismo”, susceptible de apropiaciones múltiples y repercusiones prácticas disímiles (Valencia, 2010: 79). Así pues, el humanismo tiene un epicentro en los (así llamados) “derechos humanos”, pero es importante recordar que estos refieren a un fetiche alegórico y moral conectado -tanto histórica como empíricamente- al sistemático ejercicio de la violencia de clase, hoy arraigado en la razón de los países dominantes y encarnado en la sensibilidad de las clases dominadas. Por su parte, la práctica humanitaria (en tanto ayuda o socorro) revela una cadena de dependencia que “une a aquel que la recibe y a aquel que la otorga” (Mbembe, 2011: 111-112). Por esta razón, los procesos represivos tienden en ocasiones a converger (sin tensionarse necesariamente) con la forma del humanitarismo.

⁴ Para un desarrollo de la idea de pobreza como fantasma ver Seveso (2015: 85 y ss). Según específica K. Marx “la Economía Política no conoce al trabajador parado, al hombre de

un sujeto miserable que debe ser contenido por la política asistencial, un inválido social que resulta incapaz de insertarse en la dinámica de la sociedad productiva o un criminal que requiere ser anulado por la maquinaria represiva. Miserabilización, invalidación y criminalización constituyen (al menos) tres de los relatos que están anclados a la sensibilidad dominante y sobre los que se sostienen las prácticas de regulación/control de la pobreza en nuestras sociedades (Seveso, 2015: 279 y ss.). Es precisamente mediante estas construcciones de sentido -que entrelazan el sueño de la vida que deseamos tener, con la imagen de la ciudad en la que vivimos y los relatos que construimos respecto a los otros- que se actualizan y perpetran distancias espaciales, desencuentros interaccionales y aversiones sensitivas entre-classes que facultan el despliegue de tramas de acción política y sus matrices de violencia.

En esta lectura seguimos al pensador esloveno Slavoj Žižek, quien nos advierte que debemos alejarnos de la percepción de la violencia subjetiva que opera como un señuelo ideológico en nuestro presente. Poner acento en la expresión designable de la violencia nos confronta con un estado hipotéticamente armónico que impide cuestionar las relaciones de poder y violencia inherentes a la conformación y reproducción del orden desde sus diferentes pliegues. Una mirada al sesgo debe re-conectar las condiciones de organización y reproducción materialista inscriptas en cada imagen, en cada práctica, muchas veces referentes a la violencia sistémica en sus bases (Žižek, 2009: 10). Esto, finalmente, habilita a la indagación de los fenómenos desde la crítica ideológica, capaz de interpretar las relaciones de dominación que nombran y constituyen al ser, demarcando el vínculo entre la violencia ontológica y la violencia presente en el tejido social. “Por esto es necesario correrse de lo horroroso de ciertos contenidos para interrogar esta forma de horror social constituyente, que refiere al capital mundial integrado y a las modificaciones de nuestra percepción” (Boito, 2014: 36).

La materia sensible que soporta nuestras prácticas puede ser considerada, así, uno de los eslabones centrales que compone la cadena de relaciones de dominación, entre las dinámicas de acumulación, que esquematizamos en la primera sección, y los mecanismos de regulación/control que los sostienen, presentados en esta segunda parte. La trama vectorizada y convergente entre políticas sociales y políticas de seguridad asienta su matriz de violencia en la estructura del sentir vigente, inscribiendo su fisonomía humanitaria/represiva en el pliegue más profundo de nuestra piel. El capitalismo sostiene, en este sentido, “un tipo de «pedagogía de la crueldad» que se aprende día a día, con ejercicios de terror dulce que obturan su contigüidad con el terror más crudo” (Boito, 2014: 36).

3. Políticas estratégicas en escenarios urbanos contemporáneos

Partiendo de situaciones de conflicto que vienen siendo indagadas por los autores,

trabajo, en la medida en que se encuentra fuera de esta relación laboral. El pícaro, el sinvergüenza, el pordiosero, el parado, el hombre de trabajo hambriento, miserable y delincuente son figuras que no existen para ella (...) son fantasmas que quedan fuera de su reino (Marx, 1999: 124).

en el presente apartado abordamos la convergencia estratégica entre políticas asistenciales y políticas de seguridad dentro de particulares escenarios de pobreza.⁵ Más allá de la singularidad que revisten los casos considerados y de los marcos temporo-espaciales específicos que suponen, revelan una serie de transversalidades que, de manera anticipada, corresponde explicitar. Éstos refieren genéricamente a redes de conflicto estructuradas por dinámicas de expropiación que ponen en “jaque” la condición vital de los sujetos. El Estado se sitúa aquí como un agente central (más no exclusivo) que es co-productor de estas situaciones y a la vez apunta las condiciones de conflicto emergentes. Jóvenes de ámbitos populares y pobladores de una ciudad dormitorio conforman, en este contexto, poblacionales/territorios fuertemente intervenidas, vueltas objeto de acción de políticas socialmente legitimadas. Finalmente, desde una mirada estructural, corresponde comprender a las medidas aplicadas en cada caso como fragmento de una estrategia mayor; es decir, como formas coyunturales desde las que se despliegan las modalidades de intervención/acción sobre los sectores estudiados.

La recuperación de los casos no pretende exhaustividad sino potencialidad analítica, partiendo de un procedimiento argumental que articula el montaje de componentes conceptuales y empíricos. De este modo, si en principio cada caso conlleva la incorporación de datos cuantitativos y/o cualitativos, el proceso de selección y organización de la información integra por sí mismo la producción de sentido desde el texto y el contexto, condensando en su articulación momentos analíticos de indagación. Los materiales de base trabajados conjugan el análisis documental con datos secundarios y entrevistas (tanto de carácter individual como grupal), integrando de manera variable instancias de observación y participación que, en orden a la simplificación expositiva, son mayormente “parafraseados” antes que citados en su extensión. Si bien las técnicas de las que se desprenden los resultados son múltiples y poseen un carácter mixto, su articulación transversal está alimentada por un diagnóstico común, relativo a los marcos teóricos de referencia y los horizontes de construcción del problema previamente esbozados.

Desde aquí, sin pretender la representación definitiva de los fenómenos, esta estrategia metodológica permite desplazarnos desde el supuesto interpretativo basado en la existencia de dispositivos y mecanismos impersonales que regulan lo social a su visibilización a partir de los efectos que producen en tanto práctica.

3.1 De saqueadores, jóvenes y política: formatos sociales y represivos en Córdoba

Un primer caso que permite puntualizar las relaciones hasta aquí aludidas son los

⁵ El conjunto de los autores de este trabajo participa del Programa “Ideología y prácticas sociales en conflicto” (CIECS/CONICET), dirigido por Eugenia Boito y María Belen Espoz. La sistematización del escrito es, a la vez, producto de los primeros procesos de diálogo enmarcados en el seminario optativo “Ideología, prácticas y conflictos sociales en el escenario urbano cordobés”, coordinado por María Eugenia Boito en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, en el cual los autores han participado como colaboradores. Ver en: <https://ideologiayconflicto.wordpress.com/>

saqueos producidos en la ciudad de Córdoba durante el 3 y 4 de diciembre del año 2013, suscitados en el marco de un “amotinamiento” policial en reclamo por un aumento salarial y una crisis en la cúpula directiva relacionada con denuncias por narcotráfico en la institución.⁶ Las medidas circunstanciales que organizaron la protesta, ancladas a la restricción en el desempeño de las actividades de seguridad, definieron una crisis a la vez institucional y política ante la suspensión momentánea de uno de los mecanismos represivos fundamentales del Estado (la policía y el sistema judicial) a partir de la cual ciertos sectores de la ciudad ingresaron en un estado de confrontación abierta. En dicho contexto, y en paralelo al acuartelamiento policial, se produjeron una serie de saqueos, especialmente en zonas comerciales de la ciudad, así como medidas de ataque entre “vecinos” frente a un potencial otro amenazante, concretadas en la construcción espontánea de barricadas y en acciones de linchamiento.

Sin pretensiones de exhaustividad, nos interesa referir, primero, a los discursos políticos y mediáticos que circularon en aquel momento -puntualizando en lo que fue constituido como problema social y violencia-, así como reconocer la forma de interpelación a los principales agentes implicados. Este es el marco escenificado que nos permitirá comprender, en un segundo momento, el tipo de respuesta diseñada desde el Estado frente a las situaciones de violencia abierta, asentadas en la convergencia estratégica a la que venimos refiriendo.

Acerca del escenario conflictual, el entonces Gobernador de la Provincia, José Manuel De la Sota, manifestaba que “[l]os saqueos no se produjeron por una demanda social. No es que la gente salga a robar porque no tiene para comer. Estamos gracias a Dios, lejos de eso” (La Voz del Interior, 4/12/13). Por su parte, el jefe de gabinete manifestó que “[e]n Córdoba no hubo familias con hambre que salieran a robar comida, aquí hubo ladrones, vándalos que iban a buscar cualquier producto menos comida” (Agencia Telam, 4/12/13). Desde una mirada al sesgo, lo que por un lado podemos reconocer en la palabra oficial es la censura a la tematización y discusión de la pobreza. La referencia al delito, sometida a un marco de construcción discursiva, procura remitir a un estado de anomia social y de responsabilidad individual. A su vez, dentro del orden del discurso elaborado, no existe referencia a una “demanda social” que explique la estructuración de la acción. El conflicto se encuentra descontextualizado y atomizado.

Para desmontar el sentido de esta observación algunos datos agregados pueden resultar ilustrativos. Entre los años 2002 y 2010 la provincia de Córdoba había experimentado un crecimiento productivo constante del orden del 79,4%, consolidando a la ciudad capital como un polo fundamental de actividades empresariales y comerciales. La industria competitiva de automóviles, tecnología y software se desarrolló drásticamente, mientras la producción del sector primario en granos y agro-exportador se consagró como el principal ámbito productivo, desarrollando la elaboración de bioetanol con base a maíz hasta situar a la provincia en el tercer puesto dentro del ranking nacional de exportaciones (Cámara Argentina de Comer-

⁶ Para un detalle sobre las relaciones de complicidad entre narcotráfico, policías, poder judicial y sistema político, consultar la nota periodística: <http://www.lavoz.com.ar/politica/el-narcoescandalo-dia-por-dia>

cio, 2010). Paralelamente a este proceso, la tendencia de embellecimiento estratégico de la ciudad tendió a profundizarse, en función de políticas activas de turistificación y patrimonialización que acentuaron las condiciones de cercamiento y represión de los cuerpos contrastantes con la imagen deseada de la ciudad (Boito y Espoz, 2014). Como contracara a estas relaciones, durante esos años el CIPPES (2011) registraba que el 23,1% de la población local se encontraba en condiciones de pobreza (equivalente al 16,4% de los hogares); y mientras el mercado laboral no lograba absorber la masa desocupada, la participación en el ingreso del sector no asalariado sólo se modificó en 5,5% puntos, pasando del 22,1% en 2002 al 27,6% en 2010. En este contexto, el núcleo de los denominados “Ni-Ni” era cercano al 13%; esto es, existían unos 62 mil jóvenes que no estudiaban, trabajaban, ni buscaban trabajo, evidenciando profundos problemas de inserción en el sistema educativo y/o el mercado laboral.

Admitir oficialmente que la pobreza y el desempleo constituyen una presencia estructural en una ciudad pretendidamente hecha “entre todos” -según especifica un slogan reciente del gobierno- supone reconocer que la totalidad sistémica falla y que, además, la igualdad política (o incluso el ensueño de libertad a través del consumo) constituye nada menos que una fantasía. Es por eso que, en su lugar, veíamos que en el discurso oficial opera la construcción del otro de clase como sujeto riesgoso, encarnado en una figura fantasmática que representa a la violencia subjetiva.

Dentro del contexto de crisis institucional ya esbozado, una de las principales expresiones de las relaciones “inter” e “intra” clases en la urbe cordobesa fueron los enfrentamientos territorializados cargados de agresión, a partir de los cuales se volvió visible la latencia conflictual asociada a las condiciones de socio-segregación. Lo socialmente sintomático es que, mientras la nominación oficial refería a “vándalos” y “saqueadores” (nominando subrepticamente a sectores sociales específicos), las violencias perpetradas por los sectores medios y altos -un grupo socialmente difuso llamado “vecinos”- recibieron una lectura dualizada, llegando a ser tematizadas en los medios como casos de justicia por mano propia.⁷ Borrados en primera instancia los rastros de estructuración que dieron origen a los saqueos, las acciones perpetradas “hacia abajo” -que incluso implicaron linchamientos sobre jóvenes en la zona céntrica de la ciudad- fueron resignificadas como una práctica de restitución justa ante el robo de mercancías en comercios.

Ahora bien, dentro del escenario de violencia subjetiva que visibilizaron los saqueos, la trama entre políticas asistenciales y de seguridad jugó un importante

⁷ Un titular de periódico describe: “[c]alles sin efectivos, locales robados y vecinos armados”. Dentro de la nota se cita la palabra de un vecino: “[s]i los policías no están ¿quién nos cuida? ¿El Eter? [fuerza especial de seguridad local]. Si el Eter cuida a los hiper [refiriéndose a los hiper mercados]. A nosotros, nadie nos cuida. A mí me va a cuidar «ésta», dice Raúl, un almacenero de barrio Alberdi, mientras señala una pistola 22.” En un recuadro de la nota se puede leer: “Caos en Urgencias. Noche trágica. En el Hospital de Urgencias las salas de atención fueron un caos durante la madrugada. Hubo numerosos heridos, en algunos casos por enfrentamientos entre vecinos y saqueadores” (La Voz del Interior, 4/12/13).

papel como vía de confrontación sistémica; situación difícil de comprender al margen del estado de conflictividad latente (instaurado como violencia sistémica) que, como evidenciamos, fue “blanqueado” vía mediatización ideológica.

Una de las medidas implementadas como respuesta al emergente conflictual fue el “Confiamos en Vos”: un programa de formación y empleo destinado a unos 10 mil jóvenes Ni-Ni de entre 14 y 24 años. Al respecto, el Gobernador José Manuel De la Sota se expresaba del siguiente modo: “[v]amos a ir a buscar a las casas a los jóvenes desesperanzados (...) queremos que estos chicos dejen de ser ní-ní y pasar a ser sí-sí, sí estudian, sí trabajan y se capacitan”. La instancia de mediatización a su vez demarcó el escenario social concreto a ser intervenido: “[c]uando DLS dijo que irán a buscar a los adolescentes y jóvenes a sus casas, se refería a quienes vivan en los barrios ciudades (todos) (...) 19 en total. 0 en las 11 principales localidades del interior” (Día a Día 02/02/14). La mecánica de acción especificaba, nada menos, que las poblaciones a ser intervenidas son aquellas que se encuentran entre las más pobres y más fuertemente estigmatizadas de Córdoba.⁸

Las palabras del Gobernador pronunciadas en el 7º Coloquio Industrial de la UIC (Unión Industrial de Córdoba) aclaran, finalmente, la inscripción de la violencia sistémica en esta iniciativa, directamente asociada al modelo productivo.

“[J]unto con la reforma económica tenemos que darnos cuenta que hay una juventud que está en emergencia, que necesitamos declarar la emergencia juvenil en el país, que aquellos que no lo vean desde el punto de vista social, al menos nos apoyen por su propia seguridad, para que un chico que les abre la puerta de un taxi cuando sale de un restaurant no le meta una puñalada para sacarle la billetera y comprar paco” (Página de Prensa Gobierno de Córdoba, 6/08/2014).

Bajo el lema “Qué sociedad queremos como argentinos”, el Gobernador de la Provincia vinculaba en este discurso la instrumentación de las políticas sociales de educación y trabajo con una concepción activa del progreso asentada en la extracción de materias primas para la producción energética. Haciendo particular referencia al potencial desarrollo de un polo económico con Brasil, la cooperación de Estados Unidos y la Unión Europea, apuntaba a la relevancia estratégica de las cuencas acuíferas, de minerales y metales en la zona de la cordillera en función del mercado mundial, así como a la recuperación del modelo productivo en asociación directa al crecimiento del empleo vía políticas sociales. Dentro de este escenario, la regulación activa de la pobreza resultaba estratégica.

“Para mí los planes sociales de la Argentina que viene tienen que ser dos: educación y trabajo. Son las dos cosas que vuelven a hacer grande a nuestro país (...) Y lo que nos interesa es lo que les interesa a ustedes que son nuestros empresarios son, por supuesto, la agroindustria, la fabricación de maquinaria agrícola, autopartes de automóviles, la industria informática y el turismo (...) Educación nueva; educación y trabajo. Es bueno educar en valores para que seamos buena gente pero la educación

⁸ Los barrio-ciudad son el resultado del proceso de desalojo y reubicación de villas miseria hacia la periferia de la ciudad, concretado en el marco de un programa habitacional denominado “Mi Casa, Mi Vida”. Ver Levstein y Boito (2009); Boito y Seveso (2014).

tiene que estar ligada a la actividad productiva, si no, no abre futuro”.

La trama asistencial/securitaria adquiere peso relativo en este caso dado el entrelazamiento dialéctico entre condiciones estructurales, construcción ideológica del conflicto e identificación de responsables. Según venimos viendo, la instrumentación de políticas “sociales”, antes que referir a poblaciones en riesgo, da cuenta en este caso de la existencia de sujetos peligrosos, delincuentes o criminales, con particular referencia a los jóvenes. A partir de ello, se instala fuertemente la pretensión de colonización del deseo de ese otro de clase, en tanto no sólo es borrado de la ecuación como agente decisorio, sino que existe una explícita inscripción de lo que tiene que desear (educación y trabajo) como pieza clave de una ciudad en progreso. En este contexto, asistencia y seguridad, desocupación y delincuencia, son la doble cara de una misma estrategia de acción que, globalmente, esconde la violencia objetiva que configura las desigualdades y los mecanismos que la (re)producen.

Otro eje relevante a considerar en este caso es la concepción del control territorial ligado al poder y la violencia legítima del Estado. Aun en un escenario como el que venimos caracterizando –demarcado por una situación de profunda deslegitimación institucional, dado el amotinamiento de las fuerzas de seguridad y de las denuncias por narcotráfico y corrupción que implicaron a numerosos efectivos-, el Leviatán aparece una y otra vez como figura central de la política. Tanto los discursos gubernamentales como los mediáticos enfatizaban que, pese a todo, “la justicia” debía permanecer en manos de la policía, garante del orden, la paz y la circulación.

El primer paso en este sentido fue dado en orientación al control institucional. Dentro de la declaración de un estado de “emergencia” en seguridad en toda la ciudad, el 26 de febrero del año 2014 fue sancionada la ley 10.187 con destino a regular el sistema de sanciones frente a conductas consideradas “subversivas” en las fuerzas de seguridad (policía provincial y servicio penitenciario). Por otro lado, tendieron a profundizarse las medidas represivas contra los sectores populares, aplicando una política de “castigo espectacular” concretada en acciones de visibilización a través de detenciones masivas, operativos de saturación y “corralitos” humanos desplegados en la vía pública, ampliamente difundidos en los principales medios de comunicación.⁹

Esta situación actualizó el rostro represivo más crudo del accionar estatal local que, al menos desde el año 2005, profundiza la tendencia de policización en la ciudad de Córdoba. Esto incluye la especialización creciente de las fuerzas de seguridad, la segmentación de circuitos urbanos de acción y la intervención poblacional selectiva; técnicas de zonificación urbana, asentadas en mapas de vulnerabilidad social y “zonas rojas” que llevan a la delimitación de áreas de intervención y saturación (Scribano y Seveso, 2013; Aimar y Peano, 2013); así como la activa apelación a la ciudadanía vía mercantilización de la seguridad que -como parte del programa “Córdoba más Segura”, ejecutado desde el año 2015- conlleva una dimensión participativa anclada al uso creciente de dispositivos electrónicos

⁹ Los “corralitos” implicaron detenciones orientadas a sectores subalternos, expuestos espectacularmente tras vallas metálicas, esposados y a cara cubierta.

que van desde alarmas comunitarias hasta grupos de “WhatsApp” (Peano y Torres, 2017).

En el complejo puzzle que supone este caso, las políticas de asistencia y de seguridad pueden ser reconocidas como formatos de intervención que, actuando de manera concomitante sobre la misma población (los jóvenes de sectores populares), intervienen activamente sobre el orden territorial urbano, las formas de hábitat/habitabilidad de la ciudad, así como en las posibilidades de emplazamiento, desplazamiento e interacción “de” y “entre” clases. Estos formatos revelan un continuo con las modalidades de “castigo a la pobreza” -en el sentido entendido por Wacquant (2010)-, tanto sociales como penales, así como sobre los ámbitos de expulsión del mercado y los espacios habitados en la ciudad. Ambas se evidencian en trama relacional, convergente, pero en función de ámbitos específicos de ejercicio.

3.2 El conflicto contra Monsanto en Malvinas Argentinas

Actualmente la localidad de Malvinas Argentinas está rodeada por plantaciones de soja transgénica. La contaminación atraviesa a sus pobladores desde la década del '90, cuando el agronegocio comenzó a reemplazar al cordón verde compuesto por quintas y huertas. La proximidad entre los campos y las viviendas permite que hoy los agroquímicos impacten directamente en las condiciones de vida de la población, detectándose afecciones frecuentes de tipo ocular, cutáneas y dolores de cabeza, así como una elevada proporción de casos de cáncer, malformaciones y abortos.

Uno de los principales núcleos de conflicto por los que tuvieron que atravesar los vecinos, y que refiere a esta misma situación, es la disputa contra la Multinacional Monsanto entre los años 2013 y 2016, orientada a la instalación de una planta acondicionadora de semillas. Durante esta etapa, la protesta fue nucleándose en torno a dos colectivos principales: la asamblea de vecinos “Malvinas lucha por la vida” y los “Autoconvocados del acampe”, apoyadas por una red conformada por distintas instituciones, organizaciones, profesionales y sectores independientes. En este contexto, el gobierno provincial y municipal no sólo llegaron a ser desmascarados como agentes integrados en los procesos de negociación empresarial, sino también como interventores directos que favorecieron los intereses mercantiles mediante políticas específicas.

Las situaciones de padecimiento y el estado de vulnerabilidad de los pobladores, así como la acción colectiva concretada como proceso de reivindicación frente a Monsanto, están inscritos en una compleja red conflictual -a la vez local, nacional y regional-, que refiere al sistema agroindustrial, fundado en el traslado de las lógicas productivas de la industria al campo. La llamada “agroindustria” hunde sus raíces en el proceso de expansión del capitalismo descrito por Marx. Supone la tecnificación de ámbitos regidos inicialmente por otras lógicas, orientadas al aumento constante de la productividad. Las zonas agrarias despobladas de campesinos y peones, funcionando como una gran fábrica sostenida por máquinas, químicos y técnicos, expresa la imagen de continuidad y profundización de la depredación y la desposesión sobre nuevos ámbitos de ejercicio, incluyendo la

apropiación de la vida por medio del patentamiento genético (Bensaïd, 2011). El corrimiento de la frontera agropecuaria y la concentración de la propiedad de la tierra; la precarización del trabajo rural y su eventual reemplazo por maquinaria; el desalojo del campesinado y de comunidades originarias; la pérdida de diversidad alimentaria y la sobreexplotación de materias primas; la destrucción de la biodiversidad -por desmontes y uso nocivo de la tierra-; la degradación de los suelos, la contaminación del aire y el agua, que a su vez impactan en los procesos de salud/enfermedad poblacional, entre otros aspectos; todos estos núcleos conflictuales constituyen expresiones de la dinámica en que se inserta el caso de referencia.

Al respecto, es importante especificar que, actualmente en Argentina, la exportación de granos transgénicos ha llegado a posicionarse como uno de los enclaves y termómetros básicos de la economía. Desde la instauración inicial de la agroindustria en los '90 el modelo no ha dejado de afianzarse, extendiéndose progresivamente y llegando prácticamente a monopolizar la producción. Según el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva «Argentina Innovadora 2020», “el sector de Agroindustria constituye el 25% de la industria manufacturera y representa el 40% de las exportaciones. Su valor de producción se aproxima a los 177.000 millones de pesos y da trabajo a 600.000 personas en todo el país” (Argentina Innovadora, 2017). Es desde allí que podemos comprender la relevancia del emprendimiento en Córdoba, como parte del proyecto de consolidación de una cadena local de conversión productiva entre maíz, bioetanol y subproductos para la provisión de gluten feed y granos destilados para animales de ordeño y feedlots; instalación proyectada como la segunda planta más grande de Latinoamérica, que debía ocupar un sitio estratégico en el marco de la producción regional.

Numerosas investigaciones especifican la estrecha relación entre el modelo agroindustrial contemporáneo, la destrucción medioambiental y la precarización de la vida. Sin embargo, el desarrollo de la lógica agroindustrial en los países del Sur está asentada en la fantasía del progreso y la modernidad científica, a partir de la cual se sostienen representaciones asociadas a la vida rural como sinónimo de retroceso, al hambre como resultado de la improductividad y a los países centrales como modelo/respuesta a estas condiciones. Este es el marco en el que la industria agropecuaria en general, y la aplicación de la genética y la química como técnicas específicas, han cristalizado como propuestas superadoras, mellando a su vez en la sensibilidad alimentaria, regulando activamente “el gusto” y “lo deseable” social. Argentina, de hecho, fue uno de los primeros países latinoamericanos que aceptó la transgénesis como método productivo. Según el investigador Pablo Ariel Pellegrini, el 100% de la soja argentina pertenece a Organismos Genéticamente Modificados, siendo que las 23,9 millones de hectáreas de cultivos que tiene el país representan la tercera mayor superficie sembrada del planeta (BBC Mundo Argentina, 12/10/2014). Y sin embargo, el grueso de la exportación actual en soja, maíz y trigo de Argentina apunta al mercado mundial y, dentro de este, a la fabricación de alimento balanceado para ganado y biocombustibles (Barruti, 2013: 88).

En contraste, en el año 2014 se dio a conocer un informe proveniente del Registro Provincial de Tumores, dependiente del Ministerio de Salud, destacando que los

departamentos de Córdoba que registran tasas más altas de mortalidad son aquellos donde se practica la siembra intensiva de granos. Según datos oficiales, en toda la zona Este dedicada a la agroindustria la muerte por cáncer supera ampliamente la media provincial (Diario La voz del interior: 29/5/2014). Entre tanto, en la localidad de Malvinas, 22 de cada 100 mujeres han sufrido abortos espontáneos. Las neumopatías y dermatitis llegan al 15,46% y 10% entre los pobladores, mientras que en la zona más expuesta a las fumigaciones alcanzan al 20,25% y 30% respectivamente. Los defectos al nacer representaron el 0,66% en las superficies menos expuestas, mientras que en las zonas colindantes a los campos llega al 1,83%. En el centro de la localidad no se han encontrado casos de cáncer y tumores, mientras que en los márgenes la cifra llegó al 1,83% (Página Reduas, 4/2/2013). Así, los costos sociales de la acumulación por desposesión -en el sentido entendido por Harvey (2005)- evidencian una práctica clasista del sacrificio, dadas las características del emplazamiento proyectado, la incidencia del gobierno para su localización y su espacialización en cercanías a la población.

La particular etapa de conflictividad que se abrió entre los vecinos de la localidad de Malvinas Argentinas y la firma Monsanto entre los años 2013 y 2016 resulta paradigmático en esta dinámica, no sólo por constituir un ejemplo palpable de las tendencias de ocupación, desposesión y destrucción perpetrada por el sistema productivo contemporáneo, sino por referir a un caso exitoso en las reivindicaciones comunitarias. Las primeras indagaciones sobre el problema arrojaron como uno de los resultados centrales el avizoramiento de transformaciones en la experiencia de aquellos sujetos que, de distintos modos, estuvieron involucrados en el conflicto (Sanchez y Valor, 2017; 2016); particularmente, en relación con los marcos perceptivos y modulaciones emocionales, que fueron modificando las tramas relacionales en la comunidad. En esta dirección es que adquiere particular relevancia la relación entre los conflictos sociales y las experiencias. Como parte de estas condiciones, los rasgos específicos de la localidad de Malvinas evidenciaron, desde un principio, una serie de tensiones entre las promesas de trabajo y seguridad realizadas por la multinacional y sostenidas por la Municipalidad, las condiciones vitales de la población y los efectos potenciales de la actividad empresarial sobre el entorno natural y comunitario.

En este caso, es posible apreciar el viraje discursivo de la empresa, que pasó progresivamente desde la propaganda de beneficios hacia la defensa contra los reclamos. Durante la primera etapa de debates, Monsanto apuntó a la sensibilización colectiva a partir del convencimiento: aludiendo a la sustentabilidad ambiental de sus operaciones; a las oportunidades laborales que brindaría; al desarrollo económico y al progreso asociado a su contribución; al apoyo brindado por los tres niveles de gobierno, entre otros aspectos. La imagen positiva procuró ser reforzada entre pobladores, periodistas y funcionarios a través de viajes a la planta de Monsanto en Rojas (Buenos Aires), evidenciada como ejemplo y modelo productivo.¹⁰ En colaboración con la Fundación Inclusión Social, la empresa llevó a

¹⁰ Como contrapunto, el abogado de ex trabajadores de dicha planta constituidos como querellantes, expresó en una oportunidad: “me han venido a contar como vuelcan los herbicidas y productos químicos en un lagunón que tiene adentro y va a un zanjón que termina fuera de la planta”. También denunciaron el aumento de cáncer y otras enfermedades, y que no existe control por parte del Estado (Ecos Córdoba, 27/3/2013).

cabo una encuesta domiciliaria en toda la localidad para relevar las necesidades laborales, desarrollando cursos de oficios en una de las escuelas. Sin embargo, conforme las críticas se agudizaron, el contenido de las respuestas se modificó. La empresa rebatió a los manifestantes afirmando que el uso de agroquímicos sería marginal; que la toxicidad de los productos era reducida y los problemas de contaminación estaban relacionados con el uso tecnológico inadecuado; que la asociación entre la historia de la empresa y sus prácticas actuales sólo buscaba “generar temor” entre la población (Diario La Voz del Interior, 19/8/2012). En este contexto, Monsanto presentó sus “reportes de sustentabilidad anuales” ante los medios (Diario La Voz del Interior, 26/6/2013), desdiciendo por este camino otros informes que demostraban la insustentabilidad de sus prácticas.

En lo tocante a los intereses del presente trabajo, la óptica de los sujetos en resistencia evidenció una profunda distancia entre el “deber ser” del Estado, supuesto garante de derechos, y su práctica efectiva, dada la interdependencia de sus decisiones y acciones en función del mercado. En este contexto, los colectivos fueron reconociendo la doble cara de intervención a la que venimos refiriendo: un rostro dual que apuntaba conjuntamente a fragmentar o coagular la acción, manteniendo a los habitantes alejados de la protesta.

Por un lado, el asistencialismo fue la respuesta predominante frente a las profundas carencias sufridas por los vecinos de la localidad, cuyo nivel de Necesidades Básicas Insatisfechas se encuentra entre los más altos de las ciudades del interior de Córdoba, alcanzando un índice de hacinamiento en el 22% de los hogares. De hecho, siendo la localidad provincial con mayor pobreza estructural de Córdoba, Malvinas ha sido caracterizada como “ciudad dormitorio”, ya que las fuentes de trabajo se encuentran mayormente en la capital, mientras que dos tercios de su población carece de empleo (Página Reduas, 4/2/2013). Desde el tejido de una red clientelar, y sobre todo movilizándolo las fibras sensibles de las necesidades económicas, el asistencialismo actuó inmovilizando a los sujetos. Apuntó hacia el cese de posibles acciones de protesta, ya que si los vecinos reclamaban en contra de la instalación podían perder la ayuda del Estado u otros beneficios otorgados desde la municipalidad. Esto incluía a los servicios básicos, cuya garantía depende hasta hoy -antes que de un derecho de los ciudadanos y una obligación municipal- de la voluntad de la Intendencia, siendo percibidos generalmente como “un favor”. Como resultado, la estrategia política tendió a erosionar las acciones colectivas mientras que, en otros casos, impactó en la posibilidad de participación de algunos vecinos. A su vez, entre quienes efectivamente siguieron involucrándose o apoyando las movilizaciones, esta práctica significó situaciones de tensión y miedo por los riesgos y la presión constante del Municipio.

Por otro lado, la cara más visible de la regulación estatal se evidenció en diversas represiones hacia la asamblea y el acampe. En inmediaciones del predio de Monsanto, cada vez que los asambleístas confrontaron con representantes de la corporación, las fuerzas policiales actuaron protegiendo la propiedad privada empresarial, aun cuando en ocasiones los vecinos eran atacados por particulares o existían órdenes judiciales que los avalaban. De este modo, la garantía a una actividad productiva considerada neurálgica para el modelo depredatorio actual -en este caso, la agroindustria- implicó el despliegue de prácticas represivas sin miramientos.

En lo que refiere a la empresa Monsanto como agente en el conflicto, se reitera esta convergencia en las políticas. Por un lado, desde el área de Responsabilidad Social Empresarial la corporación diseñó una serie de políticas de acercamiento hacia la población local, llevando a cabo cursos de capacitación en oficios, prometiéndole la creación de puestos laborales, realizando donaciones al Municipio en materia de bienes/servicios y volviendo difusa la línea divisoria entre los agentes estatales y empresariales. La vertebración de estas prácticas apeló al ideal del progreso destinado a una comunidad económicamente relegada; la “asistencia” empresarial ante las carencias de la población se evidenció como un plan de cooperación de voluntades, mientras las fuentes laborales prometidas resultaron ser menores a las anunciadas.¹¹

Por otro parte, es posible observar el doblez de la fórmula de regulación territorial anclada en la represión, abarcando desde expresiones directas de violencia física hasta formas de control sensible. En este sentido cabe destacar la presencia, en el acampe, de un grupo de choque constituido por miembros de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA) y de barrabravas del Club de Fútbol Talleres. Manifestando ser trabajadores de la empresa cuyo empleo estaba en riesgo, las acciones concretadas por estos actores lograron amedrentar a los acampantes frente al predio, implicando agresiones físicas, el robo y la quema de bienes personales, perpetradas ante la mirada pasiva de la policía. Mientras tanto, en el mes de septiembre del año 2015, el nuevo director de Asuntos Corporativos de Monsanto, Fernando Giannoni, acusó a la UNC de “inacción”, a los acampantes de ser “30 violentos” que atemorizaban al pueblo de Malvinas, y reclamó por el “destrato” recibido por el Decano de Ciencias Agropecuarias, cuyo acuerdo con la empresa fracasó (Diario La Voz del Interior, 7/9/2015). En otro orden, la empresa también recurrió a herramientas formales de presión a través de estrategias judiciales, identificando a los participantes durante las primeras reuniones masivas y las instancias de protesta (apostando a funcionarios que literalmente listaban a los vecinos participantes), así como enviando cartas documento en contra de ciertos activistas que, a juicio de la corporación, obstaculizaban sus negocios. Estos hechos visibilizaron un concreto accionar represivo por parte de Monsanto, solapado a su vez a las acciones ejecutadas por la Municipalidad.

Como en el caso previamente indagado, aquí la configuración activa de la sensibilidad constituye un doblez complementario de los procesos de regulación, observables en las marcas sobre las percepciones y las emociones de los sujetos. En

¹¹ Monsanto distribuyó una Revista con contenido específico para el caso. Allí detallaba los cursos a realizarse, la donación de una bomba de agua al municipio, su campaña de donación, entre otros aspectos, presentados como “desarrollo”. También dedicaron algunos apartados a desmentir las críticas contra la empresa. En relación a sus promesas, interpellaban a los vecinos de este modo: “[q]uieremos estar cerca tuyo para que nos conozcas y sepas lo que estamos haciendo para el CRECIMIENTO, el TRABAJO y el DESARROLLO DE LA COMUNIDAD. Porque así como vos amas tu lugar, nosotros amamos lo que hacemos” (Revista “Malvinas Quiere”, 2014; destacado en el original). En declaraciones públicas, el número de puestos laborales prometido ascendió a 400; en el primer Aviso del Proyecto ante el Municipio el número quedó fijado en 215.

particular, las tensiones cotidianas constituyeron parte estructurante de la experiencia de lucha en el contexto de agudización del conflicto. Inicialmente, cuando los vecinos comenzaron a informarse sobre las prácticas de la empresa a nivel local e internacional, y mientras tomaban lugar los primeros posicionamientos antagónicos, sobrellevaron profundas situaciones de estigmatización criminalizante. El propio Intendente en sus declaraciones pretendía borrar la presencia de los vecinos opositores a la instalación: “no llega al 5 por ciento el número de manifestantes que son de Malvinas Argentinas. Es toda gente de afuera que nos usurpan y agravan permanentemente nuestra ciudad” (Diario La voz del interior: 1/10/2013)”. A su vez, los vecinos en lucha se sentían marcados por la empresa y sus modalidades de cercamiento colectivo, a través del uso de folletería publicitaria que desdecía sus demandas, beneficios que fragmentaban la solidaridad entre los vecinos y hasta encuestas domiciliarias que en el relevamiento de las “necesidades” y “preferencias” locales registraban información personal.

Una de las tácticas que en este sentido pusieron en práctica tanto el gobierno como la empresa fue el uso del miedo, a través de diversos formatos orientados a ocluir y frenar la acción colectiva. Diversos entrevistados afirmaron que las estrategias de regulación implementadas llevaron a que en repetidas oportunidades se sintieran paralizados, desbordados por impotencias, broncas y dolores. Esto sucedió principalmente durante las represiones, que movilizaron fuertemente la dimensión emocional y demandaron un largo proceso de fortalecimiento frente a la sensación de avasallamiento, peligro o incluso derrota. En un sentido similar, las estrategias asistenciales y de cooptación política generaron divisiones y confrontaciones en la comunidad, incluso entre amigos y familiares que fueron situándose en posiciones disímiles a lo largo del conflicto.

Por último, y también como parte del manejo y la disputa por la sensibilidad, otro punto de contacto entre la multinacional y el Estado se fue tejiendo y expresando sobre la fantasía del progreso, en tanto eje neurálgico de las herramientas de regulación desplegadas. Así, el primer rostro presentado por la multinacional poseía un fuerte semblante humanitario, según su propósito de “acabar con el hambre en el mundo” (Diario La Voz del Interior, 19/8/2012). En continuidad con este discurso, durante la agudización del conflicto -dentro del boletín denominado “Malvinas Quiere”-, el Vicepresidente Latinoamericano Pablo Vaquero expresó que la construcción de la planta se encontraba interrumpida debido al bloqueo “por parte de grupos que no comparten la visión del aporte del campo al crecimiento del país” (Revista Malvinas Quiere, 4/2014). Podemos apreciar así una lógica de regulación de la acción en donde la sensibilidad aparece una y otra vez como botín de guerra, moldeada y disputada al calor de relaciones tensivas entre los agentes afectados por las reivindicaciones y el acampe.

Desde este lugar, si enmarcamos la relación entre los agentes implicados en el desarrollo del proyecto de Monsanto, reconociendo a su vez la trama entre las políticas sociales puntualizadas, podemos salir del entrampe de caracterizar sus relaciones como independientes y de reconocer al Estado como un actor ausente. Por el contrario, las estrategias de ocupación territorial evidencian aquí un vínculo estrecho entre el mercado y el aparato estatal orientado a la acumulación vía desposesión, coincidente con la lógica sacrificial de toda una población. La dispo-

sición de los cuerpos y de la sensibilidad, que fueron permanentemente disputadas a través de las políticas sociales desplegadas vía violencia explícita o simbólica, nos lleva por otro lado a destacar la existencia de prácticas en tensión que, frente al pretendido progreso, replantean a partir de acciones colectivas rebeldes la pregunta sobre el cómo seguir viviendo.

4. Conclusiones

En el presente trabajo partimos de reconocer que las políticas asistenciales y de seguridad constituyen una pieza propiamente social de la estructura sistémica, orientada a la distribución, organización y enmarque de las relaciones entre clases; políticas que, en tanto trama estratégica, convergente y vectorizada, diagraman activamente las relaciones/interacciones en su operativa práctica, asentándose en una matriz de violencia que se haya inscrita en su fisonomía. La forma activa de dichas políticas fue esquematizada conforme a escenarios conflictuales específicos, mostrando que su prevalencia en estos contextos refiere a condiciones de estructuración y reproducción. Para ser comprendida, esta dimensión precisó una articulación con las dinámicas del modelo productivo actual, así como con el nivel ideológico de mediatización del sentir, que a la vez que interpela de manera transclasista actúa focalmente sobre las sensibilidades, configurando “objetivos/objetos” de conflicto a ser intervenidos socialmente.

Si consideramos la banda de moebius trazada hasta aquí, veremos que en una lógica espiralada, de ida y vuelta, entre la mecánica sistémica y el estado de la sensibilidad social, las políticas indagadas posibilitan una activa regulación/control sobre territorios y poblaciones definidas por su condición de clase. Retomando a Žižek, es posible problematizar este conjunto de mecanismos en el contexto de gobiernos que han dejado de lado las grandes batallas ideológicas. Lo que aparece ante el vacío de las utopías es una pospolítica de la biopolítica que implica una administración del poder a través de la violencia abierta, la represión y el miedo. Así, una lectura que enfrente a la interpretación relacional entre orden social y política de los cuerpos implica reconocer a la violencia como modalidad constitutiva; no como componente exclusivo y excluyente de ciertas esferas institucionales, sino como matriz intrínseca a las políticas clasistas.

No obstante, el recorrido que comenzó con la descripción del modelo socio-productivo y su vínculo con ciertas estrategias de regulación y control, finaliza con un caso de acción colectiva. En este último escenario se traman la intervención del mercado, la coacción estatal y los dispositivos de regulación de las sensibilidades en tensión con la experiencia de sujetos organizados que lograron poner cierto límite al avance del modelo productivo. Estas experiencias impugnan la lógica de expropiación sobre los bienes comunes, señalando prácticas de resistencia y de reapropiación de las condiciones objetivas que atraviesan los procesos de subjetivación. Esta forma expresiva, que da cuenta de momentos de plenitud y de búsqueda en los actores, permite reconocer el modo en que los sujetos pueden descubrir juntos las situaciones de conflicto, releer un pasado y atravesar una fantasía consagrada -a este tenor, el ideal del progreso- que resulta casi incues-

tionable dentro de la sociedad clasista, meritocrática y totalitaria en la que vivimos.

Así, frente a la dinámica de explotación, desposesión y depredación sistémica que se despliega como paisaje “naturalizado” en la vida cotidiana, asociado igualmente a la pregnancia de la figura del espectador como formato de modelación hegemónica de lo que pensamos, sentimos y hacemos, se actualiza la lucha corporizada en nuestro presente. Es esta una expresión de intersticio y triunfo que vuelve observable y a la vez crítica las complejas modalidades contemporáneas del “hacer” con la pobreza, cuyas tramas estratégicas hemos evidenciado a lo largo del presente trabajo.

Sintetizando estos puntos, a la manera de lineamientos formalizados, podemos destacar entonces que:

- Las políticas sociales, en general, y aquellas asistenciales y de seguridad, en particular, expresan en las urbes la materialización de modalidades de gestión poblacional/territorial asociadas a la reproducción del orden.
- Su despliegue desigual y combinado, vectorizado y a la vez convergente, se revela como vía de regulación y control del conflicto interviniendo las formas de estar/hacer/ser, condensando una construcción estratégica clasista situada, expresada en formatos institucionales específicos.
- La vectorización y convergencia de estas políticas impacta en las gramáticas de la acción de sujetos y colectivos -particularmente en quienes pertenecen a sectores subalternos y son “foco” de su acción-, coagulando por este camino la emergencia de prácticas insumisas y rebeldes.
- Si bien la intervención sobre estos nodos viabiliza marcos de (re)producción del orden, también produce conflictos, de forma tal que la activa injerencia de las políticas suele conllevar, de manera inadvertida, escenarios novedosos que estructuran nuevas prácticas emergentes.

A través de este camino, creemos que ha sido posible observar al sesgo la relación entre las políticas asistenciales y de seguridad que, remitiendo inicialmente a campos específicos y diferenciales de acción, evidencian un ejercicio de actuación práctico como trama estratégica convergente orientada a la regulación activa de los escenarios de pobreza.

Bibliografía

- AIMAR L y PEANO A. (2013) “Represión y constitución de subjetividades marginales: una mirada sobre el cuerpo y la movilidad en ciudad de Villa María, Argentina”. En: Sapiens Research, Vol. N°3 N° 1.
- BARRUTI, S. (2013) Malcomidos. Cómo la industria alimentaria argentina nos está matando. Ciudad autónoma de Buenos Aires: Editorial Planeta.
- BENSAÏD, D. (2011) Los desposeídos: Karl Marx, los ladrones de madera y los derechos de los pobres. Buenos Aires: Prometeo Libros.

- BARTRA, A. (2008) El hombre de hierro: los límites sociales y naturales del capital. México: Itaca.
- BOITO M. E y SEVESO E. (2015) La tecnología como ideología en contextos de socio-segregación. Ciudades-Barrio (Córdoba 2011-2014). Rosario: Puño y Letra.
- _____ (2014) "El capital como imagen e ideología materializada: la construcción de figuras y espacios del miedo en la discursividad audiovisual sobre las Ciudades Barrio". En: en Urbanismo estratégico y separación clasista. Instantáneas de la ciudad en conflicto, Boito y Espoz (comp.). Rosario: Puño y Letra.
- BOITO. M. E y LEVSTEIN A. (Comp.) (2009) De Insomnios y Vigilias en el espacio urbano cordobés, Lectura sobre Ciudad de Mis Sueños-. Córdoba: J. Sarmiento-Universitas.
- BOITO. M. E y ESPOZ B. (Comp). (2014) Urbanismo Estratégico y Separación clasista. Instantáneas de la ciudad en conflicto. Rosario: Puño y Letra.
- BOITO, M. E. (2014) "Capitalismo/sensibilidad/violencia: forma mercancía y sensibilidad snuff". En: revista Fundamentos en Humanidades, Año XV, N° I, 29. Universidad Nacional de San Luis.
- BOLTVINIK, J. (2007) "Elementos para la crítica de la economía política de la pobreza". En: Desacatos, N°23. Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, México.
- COROMINAS J. (1994) Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana. Madrid: Gredos.
- FOUCAULT, M. (2000) Defender la sociedad. Curso en el Collège de France (1975-1976). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- GARLAND, D. (2005) La cultura del control. Castigo y orden social en la modernidad tardía. Barcelona: Gedisa.
- HARVEY, D. (2005) "El 'nuevo' imperialismo: acumulación por desposesión". En: Revista Socialist Register. Buenos Aires: CLACSO.
- MARX, K. (2004) El Capital. Crítica de la Economía Política, Tomo 1. Buenos Aires: Siglo XXI.
- _____ (1999); Manuscritos de economía y filosofía. Madrid: Alianza Editorial.
- MBEMBE, A. (2011) Necropolítica. Barcelona: Melusina
- ØYEN, Else (2005); The polyscopic landscape of povert reserach. 'State of the art' in International Poverty Research. Noruega: CROP.
- PEANO A y TORRES P (2017) "Políticas de Seguridad en la ciudad de Córdoba: poliamiento y participación ciudadana como modalidades de gestión de la conflictividad". En: Andares y conflictos urbanos: la pluralidad en el hacer y decir la ciudad. Córdoba: Dirección General de Publicaciones.
- QUATTRINI, D y SEVESO, E. (2016) "Sostener la cara. Indagaciones sobre la presentación social de jóvenes beneficiarios de programas de empleo". En: Revista Espiral, estudios sobre Estado y Sociedad, Centro Universitario de Ciencias Sociales y

Humanidades, Universidad de Guadalajara, Vol. 23, N° 67. 133-167.

SANCHEZ MARENGO, P. A. y VALOR M. N. (2016) Las emociones en la experiencia de los vecinos de Malvinas Argentinas contra la instalación de Monsanto. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba.

____ (2017) “De las angustias a los fortalecimientos: la trama emocional en la experiencia de los vecinos de Malvinas Argentinas contra Monsanto (Córdoba, 2014-2016)”. En: Sentires (in)visibles. La construcción de entornos en espacios socio-segregados. Espoz (Comp.) Buenos Aires: Editorial Teseo.

SCRIBANO A. y SEVESO E. (2012) “La cabeza contra el muro. Geopolítica de la seguridad y prácticas policiales”. En: Revista de Ciencias Sociales, Montevideo. 11-32.

SCRIBANO A. y BOITO M. E. (2010) “La ciudad sitiada: una reflexión sobre imágenes que expresan el carácter neocolonial”. En: Actuel Marx Intervenciones, Santiago de Chile. 12-21.

SEVESO, E. (2014) “Sobre los estudios de la pobreza en América Latina: hacia un examen holístico de las experiencias”. Pacarina del Sur, Revista de Pensamiento Crítico Latinoamericano, Lima (Perú), N°18. Disponible en: <http://www.pacarinadel-sur.com>

____ (2015) Sensibilidad y pobreza. Acerca de las clases medias, las políticas de asistencia y seguridad (San Luis 2004-2010). Rosario: Puño y Letra

SPIKER, P, ALVAREZ LEGUIZAMON, S. y GORDON, D. (2009) Pobreza. Un glosario internacional. Buenos Aires: CLACSO-CROP.

SVAMPA, M, (2005) La sociedad excluyente. La Argentina bajo el signo del neoliberalismo. Buenos Aires: Taurus.

VALENCIA, S. (2016) Capitalismo Gore. México: Grupo Planeta.

VAZQUEZ PRESEDO, V. (1992) “Estrategia y consenso”. En: Revista de Idea, Marzo.

VERDÚ, M. (2009) Represión en democracia. De la “primavera alfonsinista” al “gobierno de los derechos humanos”. Buenos Aires: Herramienta.

VERGARA, G. y SEVESO, E. (2013) “Detenciones corporales como reverso de las circulaciones capitalistas. Una indagación sobre recuperadores de residuos y beneficiarios estatales en Argentina”. En: Circulaciones materiales y simbólicas en América, Margarita Camarena (coord.). México: Universidad Autónoma de Querétaro.

WACQUANT, L. (2010) Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social. Barcelona: Gedisa.

ZIZEK S. (1999) El espinoso sujeto. El centro ausente de la ontología política. Buenos Aires: Paidós.

____ (2009) Sobre la Violencia: seis reflexiones marginales. Buenos Aires: Paidós.

Otros documentos:

CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO (2010); “Perfiles exportadores provinciales



2014". Disponible en: www.cac.com.ar

CIPPES Centro de Investigaciones Participativas en Políticas Económicas y Sociales (2001), Informe N° 4: Análisis de la pobreza en la ciudad de Córdoba, una mirada profunda de la realidad social actual, Córdoba. Disponible en: <http://www.cip-pes.org>

Ley Provincial 10.187 Disponible en: <http://web2.cba.gov.ar/web/le-yes.nsf/0/48C9D6D5144D386103257C8C00785BEB?OpenDocument&Highlight=0,10187>

Portal de Noticias. Gobierno de la Provincia de Córdoba, (6/08/2014). Disponible en:

<http://prensa.cba.gov.ar/gobernacion/de-la-sota-diserto-en-el-7-coloquio-organizado-por-la-uic/>